

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en el Real Sitio de Aranjuez sin novedad en su importante salud.

REAL DECRETO.

A fin de que las ceremonias que deben tener lugar con motivo de mi próximo alumbramiento, cuando el Todopoderoso permita que se realice tan fausto suceso, se verifiquen con todas las solemnidades acostumbradas,

Veugo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Asistirán á la presentación del Infante ó Infanta de España que dé á luz, los Ministros de la Corona; los Jefes de Palacio; una Diputación de cada uno de los Cuerpos Colegiados: una comisión de dos individuos nombrados por la Diputación de la Granjería; los Capitanes Generales de ejército y de la armada; los Caballeros de la Insigne Orden del Toison d'Or: una comisión de dos individuos de cada una de las Supremas Asambleas de los Reales Ordenes de Carlos III é Isabel la Católica; otra de igual número de individuos de cada una de las venerandas Asambleas de la Inclita Orden militar de San Juan de Jerusalén en las lenguas de Aragón y de Castilla, y de las cuatro Ordenes militares: el Presidente del Consejo de Estado y los de los Tribunales Supremos: una comisión de dos individuos del Supremo Tribunal de la Rota: los individuos del extinguido Consejo de Estado: el Arzobispo de Toledo: el Arzobispo mi Confesor: el Patriarca de las Indias: los que han sido Embajadores: el Capitán General de Castilla la Nueva: el Gobernador de la provincia de Madrid: el Alcalde Corregidor de Madrid: una comisión de dos Concejales de Madrid, designados por el Ayuntamiento: el Director general de la Armada: los Directores é inspectores de todas las armas: una comisión del Cuerpo colegiado de la Nobleza.

Art. 2.º Será invitado para asistir á la misma ceremonia el Cuerpo diplomático extranjero, con el cual concurrirá el Introdutor de Embajadores.

Art. 3.º Tan luego como á juicio de mis Médicos de Cámara se presenten señales evidentes de mi próximo alumbramiento, se avisará á las personas arriba designadas para que concurren de uniforme á las habitaciones de Palacio destinadas al efecto.

Art. 4.º Verificado el parto, mi Camarera Mayor lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Presidente de mi Consejo de Ministros, quien anunciará á las personas presentes este fausto acontecimiento, participándoles el sexo del recién nacido, y lo comunicará al Capitán general de Madrid y al Comandante general de Alabarderos, á fin de que se hagan con la posible celeridad las señas y las salvas de que se trata en el artículo siguiente.

Art. 5.º Para que el vecindario de la muy heroica villa de Madrid sepa acto continuo si el recién nacido es Infante ó Infanta, se enarbolará en el primer caso la bandera española en la parte del Real Palacio llamada la Punta del Diamante, y se harán salvas de 25 cañonazos en la Montaña del Principe Pio, en el altillo de San Blas y en la puerta de Bilbao; en el segundo, la bandera será blanca y las salvas de 15 cañonazos.

Art. 6.º El Rey mi augusto y mi muy amado Esposo, acompañado de los Ministros de la Corona, de mi Camarera Mayor, y de los Jefes de Palacio, presentará el recién nacido ó recién nacida al Cuerpo diplomático extranjero y demás personas reunidas en Palacio en virtud del presente decreto.

Art. 7.º El Ministro de Gracia y Justicia como Notario Mayor del Reino, extenderá el acta del nacimiento y presentación, terminada que sea esta ceremonia.

Art. 8.º El presente decreto se comunicará por el Presidente de mi Consejo de Ministros á todos los Ministerios y á mi Mayordomo Mayor, para su puntual cumplimiento en la parte que les es respectiva.

Dado en Aranjuez á 10 de mayo de 1862.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

(Gaceta de 13 del actual.)

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 1.º de abril de 1862, en los autos pendientes ante Nos por recurso de casación, seguidos en el Juzgado de primera instancia de Avila y en la sala tercera de la Real

Audiencia de esta corte, por D. Bonifacio Paz con el Ayuntamiento de dicha ciudad sobre servidumbre:

Resultando que en 14 de junio de 1859 entabló demanda D. Bonifacio Paz, exponiendo que era dueño de la heredad de tierras, titulada Palomarejo, en el término de Avila, adquirida de la Hacienda pública como procedente de aquel Cabildo catedral, la cual venia labrando sin contradicción hasta que la habia querido gravar el Ayuntamiento de aquella ciudad con la servidumbre de un camino carretero que atravesaba su heredad, partiendo desde el sitio llamado Robinson hasta la ermita titulada de las Aguas, y desde este punto al rio Grajal; servidumbre que nunca habia tenido, y uso de la acción negatoria, pidió que se declarase libre de aquella su expresada heredad:

Resultando que el Ayuntamiento impugnó la demanda sosteniendo que la Corporación eclesiástica, de quien procedía la finca, la habia disfrutado con la servidumbre del camino, y con ella la habia enajenado el Estado al demandante, como lo probaba la escritura de adquisición que se presentaba, en la cual se dan por linderos á cinco tierras de las 24 de que constan la heredad el camino que baja de los molinos de viento por la ermita de las aguas:

Resultando que el demandante replicó que los linderos que se daban á algunas de las tierras procedía de una ligereza ó equivocación de los peritos rechazando la idea de la existencia del camino el número de obradas de que constaba la heredad que resultaría de menos cabida dando aquel la extensión que se pretendía:

Resultando que practicada por las partes prueba pericial y testifical dictó sentencia el Juez de primera instancia, que revocó en 13 de octubre de 1860 la Sala tercera de la Audiencia de esta corte, absolviendo al Ayuntamiento de la ciudad de Avila de la demanda deducida por D. Bonifacio Paz:

Resultando que por este se interpuso recurso de casación contra la sentencia, citando como infringidas las leyes 46 y 47, título 28; 28, tit. 2.º y 10, tit. 1.º de la Partida 3.ª; la 6.ª, tit. 2.º de la misma Partida y sus concordantes; la 4.ª tit. 8.º libro 11, y la 1.ª tit. 10, libro 10 de la Novísima Recopilación; habiendo tambien citado en tiempo oportuno en este Supremo Tribunal el principio legal de que la sentencia debe ser conforme á la demanda: la doctrina segun la que todo prédio se presume libre de servidumbres no se prueba lo contrario: y 15, título 31, Partida 3.ª y el 1.º de la

de 7 de abril de 1818 sobre conservacion y mejora de caminos vecinales, como tambien el reglamento para su ejecución: Visto, siendo Ponente el Ministro Don Pedro Gomez de Hermosa:

Considerando que para que tenga lugar la acción negatoria de servidumbre ha de pertenecer por un título legal al que la ejerce, la finca que se pretende no deberla:

Considerando que el demandante dedujo la expresada acción en concepto de dueño de las tierras que constituían la heredad titulada Palomarejo, de la cual solo puede serlo en los términos contenidos en la escritura de venta, extendida en consonancia con los anuncios que la precedieron y que en este título de adquisición se consignó por límites en varios puntos el camino público objeto de este litigio; sin que pueda prevalecer contra lo expresado en un documento tan solemne la infundada alegación de ligereza ó equivocación de los peritos.

Considerando que no acreditada por título de adquisición la propiedad del terreno acotado como servidumbre pública por el Ayuntamiento de Avila, no suministró prueba de testigos; y que sin embargo de no creer necesaria su apreciación la Sala sentenciadora, por faltar la base de la justificación de la propiedad la hizo sin embargo, usando de sus facultades:

Considerando que segun lo expuesto no tiene aplicación en este pleito el principio legal de que debe presumirse libre todo prédio, mientras no se prueba lo contrario: las leyes 46 y 47, tit. 28; 4.ª y 28, tit. 2.º, 10, tit. 14 y 15, tit. 31 de la Partida 3.ª; la 1.ª tit. 1.º, libro 10 y la 4.ª, tit. 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación, referentes al dominio, á la prescripción y á la eficacia de los contratos, cuyos principios no se han desconocido en la sentencia:

Considerando que el Real decreto de 7 de abril de 1818 sobre conservacion y mejora de caminos vecinales y el Reglamento para su ejecución, como el orden administrativo, no tienen aplicación á las cuestiones judiciales, en que se ventila el derecho de propiedad:

Considerando, por último, que la Sala sentenciadora, absolviendo de la demanda al Ayuntamiento de Avila, resolvió toda la cuestión litigiosa, y que por tanto se invoca inoportunamente por el recurrente el principio legal de que la sentencia debe ser conforme á la demanda: (2.ª)

Hallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Bonifacio Paz, á quien condenamos en las costas, devolvién-

donde los autos de la Real Audiencia de esta corte con la certificación correspondiente. Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Gaceta de la corte en la Colección legislativa, lo pronunciamos, las copias necesarias. — Ramon Lopez mandamos y firmamos. — Sebastian Gonzalez Nandin. — Antero de Echazuri. — Gabriel Cerpelo de Velasco. — Joaquín de Palma y Villanueva. — Pedro Gomez de Hermosa. — Ventura de Guasa y Pando. — Publicación. — Lida y publicada fue la presente sentencia por el Ilmo. Señor Don Pedro Gomez de Hermosa, Ministro de la Sala primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública en la misma Sala en el día de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico. Madrid 1.º de abril de 1862. — Juan de Dios Rubio.

(Gaceta de 1 de abril último.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia entre el Gobernador de la provincia de Lérida y el Juez de primera instancia de su capital, de los cuales resulta: Que en 22 de agosto último compareció el Sr. D. Canals ante el expresado Juez, declarando que, a consecuencia de la circular del Gobernador de la provincia para que los facultados o profesores de la ciencia de cirugía presentasen sus respectivos títulos, describiendo una persona de Madrid que se le había extraviado el documento que acreditaba su título, y habiendo contestado que no constaba en los registros la expedición del título, ha sospechado que era apócrifo el que en su día se le había presentado como tal, y que en tal estado, advertido de que algunas personas se habían asociado con objeto de perjudicar la ciencia conveniente a su honra y respetada reputación manifestarlo al Tribunal para que surta sus efectos legales y le fuese recibida en justicia. Que el Juez mandó que se le recibiese declaración sin juramento, para lo cual fue citado Canals, y que en consecuencia de lo que en 26 de setiembre siguiente Don Francisco y Don Luis Roca Médicos cirujanos de Lérida, denunciaron al mismo Juez criminalmente que D. Ramon Canals, habiendo ejercido la ciencia de curar en Fraga, trasladó su residencia a Lérida hacia unos dos años próximamente, y en los cuales se había intrusado en actos públicos y privados en el ejercicio de la cirugía, habiendo creído por dichos delirios, apócrifo Canals, y por su declaración es ostensible al Juez, que habiéndose presentado un título falso para el ejercicio de esta facultad, por mas que no le hubiese presentado ni a la Subdelegación de Fraga ni a la de Lérida. Que, al darse la denuncia, se practicaron peritos diligencias, y el Juez, en atención a que Canals era Teniente de Alcalde de Lérida, puso en conocimiento del Gobernador de la provincia el procedimiento que se seguía contra el indicado funcionario por hechos que no tenían relación con el ejercicio de sus funciones administrativas. Que el Gobernador, de acuerdo con el Consejo provincial, requirió de inhibición al Juez, invocando, entre otras disposiciones, la Real cédula de 10 de diciembre de 1828 y la Real orden de 20 de mayo de 1862.

Que el Juez, después de sentenciar el artículo de competencia, resistió el requerimiento en consideración a que, no tanto se trataba de perseguir en el ejercicio de la ciencia el de lo previsto en el art. 251 del Código penal, como el cometido en el art. 226, por el título

falso que puede haber existido de aquella facultad; y que el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, insistió en la competencia, fundándose: primero, en que el conocimiento de las primeras instrucciones en la ciencia de curar está reservado a la Administración en virtud de una legislación especial; segundo, en que cuando se dice sobre un título falso de cirugía, de que de todos modos no se ha hecho uso, puede haber sido una excusa para alucinar el verro cometido; y aun suponiendo cierta su existencia y la falsedad, solo serviría para aumentar o disminuir la responsabilidad en que el Profesor de medicina Canals ha incurrido, mediando la circunstancia de que, al prevenir la ley 6.ª, título 11, libro 8.º de la Novísima Recopilación los Profesores de la ciencia de curar que presentasen sus títulos a los Ayuntamientos, exige que estos examinen si son falsos, y lo cual se encomienda simultáneamente a la Autoridad gubernativa el conocimiento de ambos puntos; y tercero, en que aun en el supuesto de que se considerase competente a la Autoridad judicial, respecto al hecho aislado de si se cometió o no falsedad en un título que parece haber existido, nunca podría privarse a la Administración del conocimiento de la intrusión en la facultad de cirugía y de todo cuanto a ello se refiere.

Vistas las leyes 4.ª, 5.ª, 6.ª y 8.ª, tit. 11, y la 4.ª, tit. 12, del libro 8.º de la Novísima Recopilación, que mandan que los graduados en medicina estén obligados a presentar ante las Justicias y Ayuntamientos de las ciudades, villas y lugares en que hubieren de residir, el título de sus grados, imponiendo penas a los que sin este requisito curasen, como asimismo a los Médicos y Cirujanos que lo verificasen sin tener carta de examen o licencia, o si estas fueran falsas.

Visto el art. 3.º, cap. 29 de la Real cédula de 10 de diciembre de 1828, que invocando y aplicando las disposiciones de las leyes recopiladas, castiga el ejercicio sin el competente título de la profesión de Médico-cirujano, Médico y Cirujano, Sangrador, con la multa de 50 ducados por la primera vez, doble por la segunda, con destierro del pueblo de su residencia, de Madrid, Sitios Reales y 10 leguas en contorno, y 200 ducados y presidio de Africa o America a la tercera.

Visto la Real orden de 17 de febrero de 1816, expedida a consecuencia de una consulta del Jefe político de León, relativa a si la averiguación de las intrusiones en las facultades de medicina y cirugía había de corresponder a los Jefes políticos o a los Jueces de primera instancia, en que se declaró que solo cuando la multa que, con arreglo a la citada Real cédula de 10 de diciembre de 1828, hubiere de imponerse a los intrusos debiera exceder de 10,000 reales se pasase a los Tribunales ordinarios el tanto de culpa que resultase, tanto para la imposición de pena, cuanto para la formación del proceso.

Visto la Real orden de 7 de enero de 1817, en que, reproduciendo la legislación vigente en la materia, se confía a la Administración la imposición de penas a los intrusos en las facultades de medicina y cirugía, siempre que se trate de las primeras infracciones.

Visto el art. 13 del Real decreto de 17 de enero del mismo año, que atribuye a los Jefes políticos la dirección del servicio de sanidad en sus provincias, bajo la inmediata dependencia del Ministro de la Gobernación.

Visto el art. 19 del reglamento de 26 de marzo del propio año, que señala, entre las atribuciones de las Juntas provinciales de Sanidad, la de presentar a los Jefes políticos las consultas y propuestas que crean conducentes a mejorar y perfeccionar el servicio público relativamente al ejercicio de la medicina,

cirugía, farmacia y veterinaria, y a reprimir eficazmente las infracciones de los leyes, reglamentos y disposiciones vigentes acerca del mismo ejercicio.

Visto el art. 6.º de la Real orden de 16 de abril del expresado año, que encarga a los Jefes políticos que prevengan a los Subdelegados de medicina, cirugía y farmacia que persigan sin contemplación y sin descanso a los intrusos, para cuyo efecto habrán los mencionados Jefes como superiores de sanidad en la provincia, de prestarles eficazmente y sin demora todos cuantos auxilios demanden y sean necesarios.

Visto el art. 251 del Código penal, relativo al que se fingiese Profesor de una facultad que requiere título y ejerciese actos propios de la misma.

Vistos los artículos 226 y siguientes del mismo Código, relativos a falsificación de documentos públicos o oficiales. Vistos los artículos 7.º y 505 del propio Código en que se declara que no están sujetos a sus disposiciones los delitos militares, los de imprenta, de contrabando, los que se cometen en contravención a las leyes sanitarias, ni los demás que estuvieren penados por leyes especiales, y que las disposiciones contenidas en su libro 3.º no excluyen ni limitan las atribuciones concedidas a la Administración para corregir gubernativamente las faltas en los casos en que se está encomendada su represión por las leyes.

Vista la Real orden de 20 de mayo de 1851, en que, haciéndose cargo de lo prescrito en el Código penal, y de lo mandado en las disposiciones que precedieron a la publicación de este, respecto al castigo de las intrusiones en la ciencia de curar, se determinó que correspondiese a los Gobernadores de provincia castigar a los que por primera vez delincan, limitándose, en cuanto a los reincidentes, a instruir las primeras diligencias, y ponerlas con el recio a disposición de los Tribunales ordinarios.

Vista la Real orden de 10 de febrero de 1859, que manda a los Gobernadores de provincia que adopten cuantas disposiciones les dicte su celo, usando de las facultades que les confieren las leyes para impedir el ejercicio de las profesiones médicas a los que sin el competente título se intruscan en ellas.

Visto el art. 3.º párrafo primero del Real decreto de 4 de Junio de 1857, que permite a los Jefes políticos (hoy Gobernadores de provincia) suscribir competencias en juicios criminales cuando el castigo del delito o falta está reservado por la ley a los funcionarios de la Administración, o cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios o especiales hayan de pronunciar.

Considerando: 1.º Que los hechos por que se dirige el procedimiento judicial contra Canals son haberse intrusado en la facultad de cirugía, y haber tenido un título apócrifo o falso de esta facultad, del cual no ha hecho uso, según lo que hasta hoy debe creerse y deponen los mismos denunciantes.

2.º Que no resultando Canals reincidente en la intrusión en la facultad de cirugía, y siendo peculiar de la Administración el conocimiento de la primera intrusión en esa facultad sin el competente título, con arreglo a las disposiciones citadas, el requerimiento de inhibición ha estado en su lugar, conforme al artículo 3.º del Real decreto de 4 de Junio de 1857, y el Gobernador de la provincia de Lérida debe conocer sin demora en la expresada intrusión de Canals, devolviendo con la mayor brevedad posible al Juez de primera instancia sus autos y un tanto de lo que nuevamente pueda resultar sobre el título, a fin de que proceda aisladamente respecto al delito de falsedad que estima consignado en el artículo 226 del Código penal;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en 1.º de marzo de 1862. Vengo en declarar esta competencia a favor de la Administración.

Dado en Palacio a 16 de abril de 1862. — Esta rubricado de la Real mano. — El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

(Gaceta de 6 del actual.)



Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan general de Extremadura lo que sigue:

He dado cuenta a la Reina (Q. D. G.) de la comunicacion de V. E., fecha 7 del actual, en que consulta si se ha de privar del uso de la medalla de Africa al sargento que fué del provincial de Merena Juan Serra y Martinez, que ha sido sentenciado a 10 años de presidio, correccional, por haberse comprometido a la mala conducta S. M., y teniendo presente lo que el Tribunal Supremo de Guerra y Marina informó en el expediente de igual naturaleza de Juan Eraso y Garcia, y la Real orden de 12 de mayo de 1862, por la que se dispuso que los individuos que poseyendo la cruz de Maria Isabel Luisa fuesen destinados a presidio, quedasen privados del goce de dicha condecoracion; se ha acordado que, por analogía, que tiene el caso que se consulta con lo dispuesto en dicha Real orden, que se recoja al referido Juan Serra el diploma de la medalla de Africa, el cual remitirá V. E. a este Ministerio para su cancelacion, debiendo servir este caso como medida general para los demas de igual naturaleza que puedan ocurrir en lo sucesivo.

De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de abril de 1862. — El Subsecretario, Francisco de Utrillas. — Señor. — (Gaceta de 11 del actual.)

SEGUNDA SECCION.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

CIRCULAR NUMERO 179.

Se encarga la busca y captura de Pedro Bolado, y se le da el tratamiento de preso. Orden pública. Negociado 4.º. Los señores Alcaldes, Guardia civil, empleados de vigilancia y demas dependientes de mi Autoridad procederán a la busca y captura del individuo cuyas señas personales se expresan en el edicto que se inserta a continuación, poniéndolo con toda seguridad, caso de ser habido, a disposición del juzgado de Ginzó que lo reclama.

Orense 17 de mayo de 1862. — Francisco Javier Capuano.

El Licenciado D. José María Trucharte y Endara, Juez de primera instancia de Ginzó de Limia. — Por el presente ruego y encargo a todas las autoridades, tanto civiles como militares, que por los medios que estén a su alcance procedan a la captura de Pedro Bolado, vecino de Abavidos, y cuyas señas personales se consignan a continuación, remitiéndolo a disposición de este juzgado según así se acordó en

cosa criminal pendiente contra el mismo sobre falso testimonio.
Cinco de Lima mayo 16 de 1862.
— José María Trucharte y Endara.
— Camilo Curvallo.

Signos personales.

Es de 62 años, estatura 5 pies, cano y calvo, color encarnado, cara redonda, ojos negros, nariz regular, viste chaqueta de piel negra, pantalón de tela rayada y sombrero de ala ancha.

CIRCULAR NUM. 180.

Se encarga la averiguación del paradero de Juan Virosta y su mujer María Altirveres.

Orden público.—Negociado 4.º

Los señores Alcaldes, Guardia civil, empleados de vigilancia y demás dependientes de mi autoridad procederán a la averiguación del paradero de Juan Virosta y su mujer María Altirveres, de oficio quinquilleros; y en el caso de ser habidos les prevendrá se presenten en la ciudad de Leon á hacerse cargo de su hija Angela, que ha sido recogida provisionalmente en el hospicio de aquella capital.

Orense 17 de mayo de 1862.—
Francisco Javier Camuño.

SECCION DE FOMENTO.

CIRCULAR NUM. 181.

Declarando a los guardas de campo jurados exentos del pago de derechos por las licencias del uso de armas.

El Ilmo. Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio me ha comunicado con fecha 9 del actual la Real orden que sigue:

Enterada la Reina (q. D. g.) de la exposicion remitida por V. E. á este Ministerio en 21 de febrero próximo pasado, en que la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Sevilla, solicita que se declare exentos de retribucion por la licencia de uso de armas á los guardas particulares del campo jurados; se ha servido acceder á sus deseos de conformidad con lo prevenido en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento de 8 de noviembre de 1849, expedido por ese Ministerio de acuerdo con el de la Gobernacion, y mandar que se consideren á dichos guardas exentos de la indicada retribucion y por consiguiente de renovar las citadas licencias anualmente, basando solo la de gratis ú otro documento en que se expliquen las señas del interesado y el número y clase de armas que usa con arreglo á la Real orden de 19 de junio último.

Lo que he dispuesto se inserte en este periódico oficial para su debida publicidad. Orense 17 de mayo de 1862.—Francisco Javier Camuño.

PROVINCIA DE ORENSE.

Seccion de Fomento.

Estado del precio medio que han tenido en dicha provincia los artículos de consumo que á continuacion se expresan, en la segunda Quincena del mes de la fecha.

MEDIDA Y PESO DE CASTILLA.

REDUCCION AL SISTEMA METRICO DECIMAL.

Pueblos	GRANOS.					CALDOS.			CARNES.			PAJA.	
	Trigo.	Cebada.	Cent.	Maiz.	Garbs.	Arroz.	Acetle.	Vino.	Agte.	Vaca.	carnero.	De trigo.	De cebada.
Alariz.	51.47	52.28	51.92	51.92	55.50	58	66	55.54	70	4.04	2.40	2.40	2.40
Bande.	52	56	44	44	26	56	68	28	50	1	2	2	2
Carballino.	50	52	38	38	32	51	70	26	72	1	3	3	3
Colanova.	56	56	40	40	56	58	64	28	60	0.86	0.86	0.86	0.86
Guinea.	56	58	40	40	52	40	64	34	60	1.06	1.06	1.06	1.06
Orense.	58	58	42	42	20	40	66	30	56	1.13	1.13	1.13	1.13
Ribadavia.	59.08	55.45	28.80	28.80	56	28.80	66	28	58.40	0.57	2.40	2.40	2.40
Trives.	44	40	54	54	56	54	64	21	46	1	5	5	5
Valdearras.	60	54	54	54	54	56	80	34	46	1.18	1.18	1.18	1.18
Verin.	52	54	54	54	24	56	70	36	60	1	5	5	5
Viana.	60	56	54	54	58	58	70	20	52	1	5	5	5
Precio medio.	55.52	56.25	56.62	58.90	50.50	55.90	68.18	29.22	54.48	0.96	2.73	2.57	2.61

Orense 50 de abril de 1862.—Francisco Javier Camuño.

JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PÚBLICA.

Disposicion del Sr. Rector trasladando la escuela completa establecida en las Caldas, Ayuntamiento de Canedo, á la capital del distrito.

El Sr. Rector de la Universidad literaria del distrito con fecha 4 del que rige, dice á esta Junta provincial lo siguiente:

«Visto el expediente instruido para la traslacion á la capital del distrito de Canedo de la escuela elemental completa de niños del mismo Ayuntamiento, establecida en Santiago de Caldas; y en atencion á que se hallan conformes todos los dictámenes emitidos sobre el particular, he acordado manifestar á V. S. que no hay inconveniente en que se verifique la traslacion propuesta, sirviéndose V. S. dar parte cuando se realice á fin de hacer en los registros las anotaciones oportunas.»

Lo que acordó hacer público por medio de este periódico oficial para conocimiento de los interesados.

Orense 14 de mayo de 1862.—
E. G. P., Francisco Javier Camuño.—
P. A. D. L. J., Eliseo Fidalgo y Suredra, secretario.

TERCERA SECCION.

Juzgado de Hacienda de Orense.

Don Juan Bohigas, juez especial de Hacienda de la provincia de Orense.—
Por el presente cito, llamo y emplazo á Sebastian José de Barrio, Juan Justo y Manuel Cándido, vecinos de Santo André en Portugal conserje de Montealegre, por término de treinta dias, para que se presenten por la escribania del que autoriza á fin de responder á los cargos que contra ellos resultan en causa que instruyo sobre aprehension de siete caballerías menores sin guia hecha por los Carabineros del Reino; apercibidos de que si en dicho término no hacen su presentacion, se susanciará la causa en rebeldia, practicándose las notificaciones que ocurran en los estrados de este juzgado, las que le pararán igual perjuicio que si fueran en sus propias personas.

Dado en la ciudad de Orense á 14 de mayo de 1862.—Juan Bohigas.—
Por mandado de S. S., Valentin de Novoa.

Don Juan Bohigas, juez especial de Hacienda de la provincia de Orense.—
Por el presente cito, llamo y emplazo á Ramon Vigo-arca, que se ignora su naturaleza ni vecindad, para que dentro del término de treinta dias comparezca en este juzgado de Hacienda á prestar una declaracion acordada por el señor juez especial de Hacienda de Algeciras en causa que instruyo sobre aprehension de contrabando sin res conocido.

Dado en la ciudad de Orense á 18 de mayo de 1862.—Juan Bohigas.—
Por mandado de S. S., Valentin de Novoa.

Juzgado de 1.ª Instancia de Lalin.

D. José Andres Iglesias, juez de primera instancia en comision de Lalin.—
Por el presente cito, llamo y emplazo á Gregorio Fajde y Meljamil, natural de la parroquia de Santa Marina de Pescoso, ayuntamiento de Rodero en este partido, de veinticuatro años de edad, para que dentro de treinta dias contados desde la insercion de este edicto en los Boletines oficiales de las cuatro provincias de Galicia, se presente en esta sala de audien-

cia á responder á los cargos, que contra el resultan en causa criminal que por la escribanía contra el mismo y otros sobre trayendo contra el mismo y otros sobre trayendo de leñas y esquilmos en los montes de Quillas y Peña Cavada, pertenecientes á los moradores del lugar de Quilla en dicha parroquia, en inteligencia que de no hacerlo seguirá el proceso su curso en rebeldía y le parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en Lalin á 10 de mayo de 1862. — José Andrés Iglesias. — Por su mandado, Domingo Antonio Gutierrez.

Idem de Carballino.

Don Tomás Benito de Cabo, escribano de S. M. en el juzgado de primera instancia de Carballino. — C. rifico: Que en dicho juzgado y escribanía de mi cargo se dió y pronunció en 10 del que rige la sentencia siguiente:

En la villa de Carballino á 10 de mayo de 1862, el Licenciado D. Rafael Gil y Olmedilla, juez de primera instancia de la misma y su partido, qu la demanda de pobreza incoada por Josefa Rodriguez, viuda de Angel do Campo, de la parroquia de Molles, para litigar con el procurador Romero, que lo es de D. Benito Mendoza:

Resultando que la Josefa Rodriguez reclamó ante el juzgado el auxilio de pobreza para litigar con D. Benito Mendoza, fundada en que todos sus bienes no le daban la renta que prefiija la ley:

Resultando que solo la contestó el Ministerio fiscal, sustentándose con este y con los estrados del juzgado por rebeldía del procurador Romero:

Considerando que aparece justificado cumplidamente que á la demandante todos sus productos no le dan el tercio de 4 reales diarios, mucho menos de lo que la ley prefiija:

Fallo: Que debo declarar y declarar legalmente pobre á Josefa Rodriguez, viuda de Angel do Campo, á quien se le defienda en papel de su clase por los dependientes de justicia sin perjuicio de derechos, librándole al efecto los testimonios convenientes:

Por esta mi sentencia definitivamente juzgando sin hacer especial condena de costas que por rebeldía del procurador Romero, se notifique en la forma prevenida si voluntariamente no se presentase á oírlo, así lo pronuncio, mando y firmo. — Rafael Gil y Olmedilla.

Así resulta de dicha sentencia á que me remito Y que conste firmo el presente.

Carballino mayo 12 de 1862 — Tomás Benito de Cabo.

Idem de Ginzo.

Don José Maria Trucharte y Endara, juez de primera instancia de la villa y partido de Ginzo. — Hago notorio hallarse vacante una procuraduría en este juzgado por fallecimiento de D. Luis Maria Alonso que la ejercia; y debiendo proporcionar con arreglo á lo prescrito en el Reglamento de Juzgados y demás Reales Cédulas vigentes, se publica con término de quince dias, á contar desde la insercion de este anuncio en el Boletín oficial de esta provincia, para que los aspirantes á dicha plaza produzcan sus solicitudes documentadas en forma dentro del expresado término, para pasado se procederá á ultimar el expediente con las formalidades establecidas.

Ginzo mayo 15 de 1862 — José Maria Trucharte y Endara. — De su orden, Vicente Diaz Teijeiro, secretario.

Idem de Caldas de Reyes.

Don José Fermoso Diaz, juez de primera instancia de la villa y partido de Caldas de Reyes. — Por el presente se encarga á las autoridades civiles y militares de la provincia la captura y remision á este juzgado de la persona de Camilo Fontenla, natural y vecino de la parroquia de Gonso ayuntamiento del Campo, cuyas señas y de trage se insertan á continuación.

Dado en Caldas de Reyes á 6 de mayo de 1862. — José Fermoso Diaz. — Por su mandado, Lic. Vicente Copperi Pallares.

Edad de 28 á 30 años, estatura corta, cara ancha, nariz aguileña, barba poca, boca grande, ojos castaños oscuros, pelo idem, color bueno; viste sombrero de los llamados liengos blanco y otras veces gorra de paño, chaqueta de paño azulada y bastante usada, chaleco de tela y pantalon de lo mismo, calza zapatos.

Don José Fermoso Diaz, juez de primera instancia de la villa y partido de Caldas de Reyes. — Por el presente se encarga á las autoridades civiles y militares de la provincia la captura y remision á este juzgado de Juan Jamando y Conde, vecino de la parroquia de Pimo, ayuntamiento de Catoira, con objeto de que cumpla la pena que le ha sido impuesta en causa sobre falsificación de unas cédulas de vecindad, y al efecto se insertan las señas personales y del trage.

Dado en Caldas á 14 de mayo de 1862. — José Fermoso Diaz. — Por su mandado, Lic. Vicente Copperi Pallares.

Edad 35 años, estatura regular, pelo negro, cejas idem, barba poblada, nariz regular, cara redonda, color trigueño; viste pantalon de tela azul, chaleco paño negro, camiseta de bayeta color castaño, sombrero colados, todo á medio uso.

Idem de Sarria.

Don Ubaldo Aud y Saco, juez de primera instancia de Sarria. — Por el presente y término de veinte dias cito, llamo y emplazo á Manuel Sanjurjo, oriundo de San Pedro de Farnadeiros, para que comparezca á contestar y defenderse de los cargos que contra él resultan de la causa formada á consecuencia del robo ejecutado en casa de Manuel Lopez Cela, vecino de San Cosmede, la noche del 27 de setiembre último; advirtiéndole que en otro caso le parará perjuicio. A su vez encargo á las autoridades de la provincia que si fuere habido, dispongan su captura y conduccion con la debida seguridad á este juzgado, y para lo cual se insertan sus señas y expide el presente.

Dado en Sarria á 12 de mayo de 1862. — Ubaldo Aud. — De mandado del señor juez, Juan Lopez Yañez.

Señales.

Edad 23 años, estatura 5 pies escasos, pelo castaño oscuro, ojos negros, nariz regular, barba poca, cara redonda, color trigueño; viste pantalon y chaqueta de tela y sombrero redondo.

Ayuntamiento de Laroco.

El Ayuntamiento, de conformidad con lo que determina la ley de sanidad y con lo mandado por el Sr. Gobernador civil, ha acordado en sesion de 30 del mes de diciembre último crear una plaza de Médico-cirujano dotada por la asistencia de 110 familias pobres con 3,000 rs. y por 227 de las ricas 2 rs. por cada visita; debiendo advertir que las condiciones bajo las cuales ha de ser admitido el facultativo titular, estarán de manifiesto en la

Secretaría de Ayuntamiento. La admision de solicitudes será por el término de 30 dias á contar desde la insercion de este anuncio en la Gaceta de Madrid.

Laroco febrero 1.º de 1862. — E. A. José Saco y Ruiz. — Juan Francisco Gonzalez, Srio.

Idem de Verin.

El día 1.º de junio próximo de doce á una de la mañana, tendrá lugar en la Sala Consistorial de este Ayuntamiento, la licitacion y remate de algunas obras de cantería, carpintería y albañilería, para reparar dicha Sala presupuestadas en 6,940 rs. cuyo presupuesto y pliegos de condiciones aprobados por el Sr. Gobernador civil, están de manifiesto en la Secretaría de la corporacion.

Lo que se anuncia en este periódico oficial, á fin de que llegue á conocimiento de todos los que deseen tomar parte en la subasta.

Verin mayo 10 de 1862. — E. A. Agustín Mascareñas, Corresponsal. — P. A. D. A. Ramon Sanchez Moreno, Srio.

Idem de Junquera de Ambia.

El cuerpo municipal de este distrito acordó reclamar de todos los contribuyentes vecinos y forasteros, las relaciones juradas de toda la riqueza que cada uno posee dentro de este municipio arregladas á instruccion, las notas de traslacion del dominio, visadas del Registro hipotecario y de todas las demás advertencias que conduzcan á la exacta nomenclacion de riqueza sobre que ha de girar el reparto territorial para el año de 1863.

Se señaló para dicha presentacion el término de 30 dias contados desde aquel en que se inserte este anuncio en el Boletín oficial, advirtiéndole que el que no cumpla, se entienda acepta la riqueza que tiene, y que en su vista ninguna queja será atendida si estos requisitos.

Junquera de Ambia mayo 15 de 1862. — E. A. José Grande.

Idem del Barco.

Con aprobacion del Sr. Gobernador civil de la provincia y de conformidad con la circular de 16 de diciembre último, se crea en este distrito municipal la plaza de un Médico con la dotacion anual de 3,000 rs. y de un Cirujano con la de 2,000, para la asistencia gratis de 660 vecinos pobres, sin perjuicio de aumentarlos si el municipio lo tuviese por conveniente hallando justos motivos; cobrados por trimestres segun se pagan las contribuciones.

Los aspirantes á dichas plazas presentarán sus solicitudes documentadas en la Secretaría de este Ayuntamiento dentro del término de 30 dias, contados desde la insercion de este anuncio en la Gaceta de Madrid, en cuya Secretaría se enterará de las condiciones acordadas por la corporacion.

Barco 12 de mayo de 1862 — E. A. Domingo Rodriguez Prada.

Idem de Villamartin.

Acordada por el Ayuntamiento y aprobada por el Sr. Gobernador civil de la provincia la creacion de dos plazas, una de Médico dotada con 2,500 rs. y otra de Cirujano con 1,500 para la asistencia de 400 familias pobres que aproximada-

mente cuenta el distrito municipal, se ha dispuesto publicar las vacantes por término de 30 dias empezados á contar desde la insercion de este anuncio en la Gaceta de Madrid, durante los cuales podrán los aspirantes presentar sus solicitudes en la Secretaría de esta corporacion donde estarán de manifiesto las condiciones de este servicio.

Villamartin mayo 6 de 1862. — E. A. P. Emilio Meruendano. — Victoriano Lopez, Secretario.

SECCION DE ANUNCIOS.

DE VIGO PARA MONTEVIDEO

Y BUENOS-AIRES.

Saldrá á la posible brevedad la Corbeta "Igualdad" Capitan D. Manuel Soto, y admite algunos pasajeros, á los que se dará el mejor trato que tiene tan acreditado.

La despachan sus armadores D. Francisco Thomas y Hermano, y dará razon en Orense D. Pedro San Vicente.

CLARIDAD Y ECONOMIA.

En el acreditado establecimiento de D. Francisco Casanova, calle de las Tiendas n.º 5 Orense, se halla el depósito del mejor gas portátil descubierto hasta el día procedente de las fábricas de Paris. Tambien se venden aparatos ó quinqués para usarlos.

La economía y ventaja de dar mejor y mas hermosa luz, ha generalizado su adopcion en todos los establecimientos públicos y comerciales de esta capital.

En el mismo establecimiento se elabora y vende chocolate desde 5 á 8 reales libra.

En la villa de Vivero, provincia de Lugo, se vende una escribanía propia en ambos dominios de Don José Raimundo Parga.

En virtud de la autorizacion dada á la Junta Directiva por la general de la sociedad "Recreo de Artesanos" de esta capital, y con el fin de amortizar los créditos contra la misma, se sacan á pública subasta los efectos siguientes:

- 266 varas y media de alfombra magenta.
- 21 sillas.
- 2 sillas.
- 2 quinqués de porcelana.
- 66 varas y media mas de alfombra.
- Un espejo de medio cuerpo.
- 21 varas de terciopelo color magenta.
- 32 varas de alfombra de cañamo.
- 7 idem de mejor calidad.
- Una consola.
- Una escribanía.
- 6 cuadros con marcos dorados.

En su virtud, las personas que quieran interesarse en su adquisicion, pueden concurrir al Salon de dicho Recreo el día 25 del corriente de doce á dos del mismo, que se hará remate en el mas ventajoso licitador cubriendo la tasa; sin perjuicio de admitir las proposiciones que se hicieren siendo aceptables, en los dias que median desde hoy, en la Secretaría de la Sociedad.

Orense 16 de mayo de 1862. — E. P. I. Juan de Igneson. — Ramon M. Valencia, Vocal Srio.

IMPRESA DE D. CESAREO PAZ Y H.